

Inseguridad: la sociedad no hace su papel

ERNESTO LÓPEZ PORTILLO

Se habla mucho de la falla de los gobiernos para crear políticas de Estado eficaces en contra de la inseguridad; poco se comenta, en cambio, de la incapacidad de la sociedad para sumarse en movimientos duraderos y productivos ante el mismo desafío. Quien se tome unos minutos para ver los compendios internacionales más avanzados sobre prevención del delito y la violencia, encontrará que es tan importante lo que hace la autoridad como lo que aporta la sociedad en un esfuerzo eficaz y democrático contra la inseguridad. Nuestra incapacidad de frenar la inseguridad, la violencia y el delito debe verse al menos en estos dos planos: gobierno y sociedad.

Una de mis principales hipótesis de trabajo en torno a la inseguridad en México es que la autoridad ve a la sociedad como parte del problema, y viceversa. Cada que hablo con un funcionario, me dice que la gente no entiende lo que debe hacer y escucho a un líder tras otro de la sociedad refiriendo que la autoridad no hace lo que le toca. Tal vez tienen razón, el problema es que mientras sigamos así, poco o nada avanzaremos. Para que las cosas cambien, deben evolucionar las ideas y las acciones en ambos frentes. En el caso de la sociedad, no estamos haciendo lo necesario para que eso pase. No hemos sido capaces de convocar la acción social colectiva de manera que propuestas nacidas desde los gobernados echen raíces al paso del tiempo y produzcan transformaciones irreversibles.

Nada de esto es sencillo, en realidad es muy difícil lograr formatos de participación social autónoma que impacten y perduren. En nuestro caso, la historia sólo incluye antecedentes excepcionales propios de una sociedad activa, más allá de los grandes momentos refundacionales. De hecho, aún hoy día, en la gran mayoría de los casos las comunidades a lo largo de nuestro país no cuentan con mecanismos de autogestión desde los cuales se activen transformaciones en su beneficio, sin pasar por mecanismos de cooptación desde el poder público. De hecho, la ausencia de alguna autoridad

en torno a iniciativas de impacto colectivo muchas veces provoca que éstas sean percibidas como débiles. A modo de contraste, en democracias avanzadas existen evidencias de que hasta el ochenta por ciento de las actividades de una persona en un día cualquiera pasa por instituciones y mecanismos participativos creados desde la sociedad civil. Buena parte de México aún funciona en las antípodas de esos modelos participativos en países donde la mayoría está vinculada a algún movimiento social organizado.

Si acaso México tiene un verdadero futuro democrático, la construcción de ideas y acciones encaminadas a solucionar los problemas

colectivos desde abajo y hacia arriba, desde los gobernados y hacia el gobierno, debería convertirse en una práctica común. Las señales el día de hoy son muy contradictorias; si bien es indudable la continua expansión del perfil social participativo, también lo es la reproducción y diversificación de mecánicas autoritarias a través de las cuales las élites públicas y privadas someten a las mayorías y garantizan sus privilegios.

Precisamente ante un régimen histórico que ha centralizado beneficios y poder, es indispensable entender que la transición hacia un arreglo político, social e institucional distinto pasa por la irrupción sistemática desde la sociedad civil en la construcción de alternativas ante los grandes problemas. Es el caso de la inseguridad, la violencia y la delincuencia, mismas que no serán superadas sin la definición de agendas mucho más claras y consistentes desde la sociedad civil y la construcción de alianzas entre actores autónomos que las hagan valer. Sin duda hay más voces autónomas que nunca y suenan con más fuerza, pero en el mapa de actores se les ve desarticuladas, y justo en esa medida, debilitadas. La fragmentación que debilita a las autoridades hace exactamente lo mismo con la sociedad.

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC

